



## **CONCLUSIONES DE LA VISITA A ESPAÑA DEL EQUIPO DE EXPERTOS DEL FMI EN 1993**

La misión del FMI suscribe la estrategia del Gobierno consistente en intentar la introducción de reformas estructurales al mismo tiempo que aplica una consolidación fiscal importante y continua con una política monetaria dirigida a la estabilización de precios. Igualmente, queremos hacer hincapié en que el éxito de la estrategia dependerá de la voluntad y habilidad de las autoridades para acometer las audaces medidas estructurales que se requieren. Durante las próximas semanas se oirán muchos cantos de sirena sobre los méritos de otras soluciones paliativas; hará falta una gran firmeza y una gran determinación para no escucharlos.

La economía española se encuentra en medio de una recesión que ha elevado la tasa de desempleo a un nivel sin precedentes y que ha contribuido a un marcado aumento del déficit fiscal. A menos que se produzca una recuperación económica temprana, vigorosa y sostenible, estos problemas sólo pueden empeorar. Teniendo en cuenta los aumentos de productividad y la considerable tendencia creciente de la población activa, se necesitaría probablemente un crecimiento anual del PIB entre el 2 y el 3 por ciento sólo para evitar un aumento del desempleo sobre el nivel actual. De manera similar, debido al rápido crecimiento del pago de intereses de la deuda pública y a la presión ejercida por los compromisos adquiridos en materia de protección social, es difícil de imaginar, incluso introduciendo medidas estructurales importantes, cómo podrían equilibrarse las finanzas públicas a medio y largo plazo en ausencia de una fuerte recuperación.

Al mismo tiempo, y aunque se hayan conseguido algunos progresos en la lucha contra la inflación, España no ha alcanzado todavía su objetivo de estabilidad de precios, ni la convergencia con los países de baja inflación del SME. Especialmente, el aumento de un 6 por ciento obtenido en los acuerdos salariales de 1993, sólo puede ser contemplado con una considerable consternación. Con esta coyuntura, relajar la lucha contra la inflación mediante una relajación significativa de la política monetaria sería, en nuestra opinión, un serio error. En realidad, y gracias en gran medida a la política monetaria que se ha seguido en los últimos años, España tiene una oportunidad histórica durante los dos próximos años para resolver el problema de la inflación de una forma duradera. Esta oportunidad no debe desperdiciarse.

Para reconciliar la necesidad de una recuperación económica y una reducción de la tasa de desempleo con la necesidad de reducir aún más la inflación, es esencial la introducción de reformas estructurales, sobre todo en el mercado laboral. Esto está tan ampliamente aceptado que se podría considerar como un axioma. Desgraciadamente lo que no se reconoce tanto entre la opinión pública es la extremada urgencia de las reformas ni lo extensas ni radicales que deben ser, ni en última instancia lo beneficiosas que serían para la mayoría de los componentes de la población activa. Lo que tiene que cambiar —y en un plazo muy corto— es la tendencia inflacionista del sistema económico, incluso en una situación de exceso de oferta masiva tanto en el mercado laboral como en el de bienes. Reformas que han sido retrasadas durante años tendrán que ser aceleradas en un corto período de tiempo y bajo circunstancias difíciles.

Como se observa en las varias propuestas que se están discutiendo, son necesarias reformas urgentes del mercado laboral en cinco áreas.

Primero, deben tomarse medidas para mejorar el acceso al mercado de trabajo, incluyendo la progresiva eliminación del monopolio ejercido por el INEM sobre la mediación en el mercado laboral, la legalización de las agencias de empleo temporal, y facilitar el empleo a tiempo parcial.

En segundo lugar, la reglamentación laboral debe ser liberalizada para permitir una utilización más flexible de la mano de obra. En este sentido es especialmente importante que se avance en aumentar la movilidad funcional y geográfica (reemplazando las “Ordenanzas Laborales”), así como en aumentar la flexibilidad de los horarios laborales.

En tercer lugar, los empresarios estarán más dispuestos a crear empleo si se convence de que el problema de los costes extremadamente elevados de extinción de los contratos laborales se ha resuelto completamente y de que no volverá a aparecer. “El trabajo temporal” no es una solución y debería estar limitado a aquellos casos en que la actividad es verdaderamente de naturaleza temporal. En nuestra opinión, la reducción de los costes de extinción de contratos laborales va a requerir la eliminación o limitación sustancial del uso de la autorización administrativa para reducciones de plantilla, así como una reducción considerable de las posibilidades de reclamación judicial.

En cuarto lugar, se necesita un cambio en la estructura de la negociación colectiva con el fin de eliminar la importante inercia actual en los incrementos salariales. Las cláusulas contractuales que imponen ajustes salariales y restricciones sobre las condiciones de trabajo que van más allá del período de vigencia del contrato (las denominadas “cláusulas normativas”) introducen rigideces adicionales en el mercado laboral y propician un sesgo

alcista para los acuerdos salariales futuros. Estas cláusulas deben ser eliminadas.

En quinto y último lugar, el sistema de compensación para los desempleados debe ser modificado de manera que se incentive una rápida vuelta al puesto de trabajo. En este sentido, nosotros apoyamos las propuestas que acompañan a la Ley de Presupuestos de 1993 y que requieren el pago del IRPF y de las cuotas de la Seguridad Social a aquellas personas que reciban una retribución contributiva por desempleo. Un endurecimiento de las condiciones requeridas para la percepción de esta retribución y la reducción del nivel de cobertura de la misma en algunos casos. Sin embargo, también es cierto que estas medidas son insuficientes para resolver este problema en su totalidad; en particular, harían falta medidas para evitar la rotación continua entre situaciones de empleo temporal y desempleo.

Continua existiendo una necesidad de reforzar la competencia en la economía española, especialmente en el sector servicios, que se caracteriza por un excesivo poder de mercado y una nociva regulación.

Se pide al Gobierno que elimine estos impedimentos, especialmente en aquellos casos derivados de prácticas anticompetitivas amparadas por el propio Estado, como son los transportes, las telecomunicaciones, la energía, el comercio y los servicios profesionales. En este sentido, la rápida puesta en práctica de las recomendaciones del Tribunal de la Competencia sería un avance importante. La ampliación del programa de privatización de empresas públicas incrementaría la eficiencia y debería ayudar a aumentar el grado de competencia.

La política de rentas podría ayudar a acelerar la reducción de la inflación. La misión espera por tanto que se pueda alcanzar un consenso en torno a una política de rentas. Un acuerdo de este tipo debe ser consistente con la necesidad de ajustar los salarios reales para acelerar la vuelta de los parados a un puesto de trabajo y no debe ser considerado como sustitutivo de las reformas estructurales. De no ser así, la ausencia de acuerdo es preferible a un mal acuerdo. En el sector público el Estado debe sin duda ejercer su responsabilidad –con o sin pacto social– para hacer cumplir acuerdos salariales que estén de acuerdo con la realidad económica actual.

En relación con las políticas financieras la misión está de acuerdo con la estrategia seguida por las autoridades. Hasta la reciente modificación del SME, la política monetaria había estado condicionada por el compromiso de mantener el objetivo del tipo de cambio. La ampliación de las bandas de fluctuación del SME ha levantado de alguna forma esta restricción, pero la libertad que se ha ganado en política monetaria debe ser utilizada con cautela.

Las autoridades han procedido de manera acertada a reducir los tipos de interés a corto plazo a los niveles que prevalecían antes de la crisis, aunque durante los próximos meses la necesidad de seguir avanzando en la lucha contra la inflación a la espera de que las medidas estructurales surtan efecto exigirá precaución a la hora de permitir bajadas adicionales de los tipos de interés. Tras esta fase, mientras prosiga la reducción de la inflación, debería quedar margen para importantes reducciones adicionales de los tipos de interés.

El tipo de cambio debe continuar siendo una referencia importante para el diseño de la política monetaria. Tras la sustancial depreciación reciente, el tipo de cambio actual indica una posición competitiva bastante satisfactoria. Por lo tanto, cualquier depreciación adicional importante debe ser considerada preocupante. Si en algún momento los recortes del tipo de interés a corto plazo ocasionaran una depreciación significativa de la peseta y una subida de los tipos de interés a largo plazo, sería un signo claro de que están surgiendo dudas serias sobre la credibilidad de la política monetaria.

La decisión de otorgar plena autonomía al Banco de España es una buena noticia, como también lo es el compromiso del Banco de establecer la estabilidad de precios como objetivo último de la política monetaria. En este contexto y para reforzar la credibilidad de la política monetaria, sería útil formalizar de una manera más concreta la estrategia que las autoridades monetarias se han propuesto seguir para alcanzar este objetivo tras la importante ampliación de las bandas de fluctuación del SME. Concretamente, si el Banco de España expresara públicamente un objetivo específico de inflación (por ejemplo, entre el 2 y el 3 por ciento a finales de 1996) ello proporcionaría a la política monetaria una mayor credibilidad y transparencia. La exigencia de informar periódicamente al Parlamento podría ser también un elemento importante en este sentido, sobre todo si supone una revisión periódica del avance alcanzado en la senda hacia la estabilidad de precios.

El esfuerzo en materia fiscal previsto para 1994 es realmente importante. Sin embargo, el ajuste propuesto tiene que considerarse como un mínimo, dados los incrementos considerables del déficit público que se han producido durante los últimos años, y será crucial evitar desviaciones presupuestarias y acumulación de atrasos pendientes de pago, con el fin de transmitir a los mercados una señal clara sobre la seriedad de la consolidación fiscal. La Misión está preocupada porque la dificultad para aplicar algunas de las medidas propuestas, así como la presencia de las tradicionales fuerzas expansivas del gasto público, pueden acabar generando deslizamientos de la trayectoria marcada. En este sentido, las proyecciones del presupuesto sobre reducciones en la masa salarial, gastos del seguro de desempleo, sanidad, y

otros gastos corrientes parecen especialmente vulnerables. Las autoridades tienen que estar preparadas para compensar cualquier deslizamiento con medidas adicionales de control de gastos tan pronto como se detecten desviaciones.

Estamos de acuerdo con los objetivos del Gobierno respecto a la consolidación fiscal a medio plazo. En la formulación del plan de acción fiscal a medio plazo que las autoridades deben desarrollar ahora, debe prestarse atención a las medidas que fomenten una mejora en el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de IRPF e IVA, que contengan los gastos en sanidad, que aumenten el grado de autofinanciación en educación, salud, y servicios públicos de transporte, y que mejoren la distribución adecuada de los beneficios sociales. Además, debe considerarse la necesidad de asegurar la viabilidad financiera del sistema de pensiones. Las medidas discrecionales en todas estas áreas tendrán que ser importantes, dado que incluso una fuerte recuperación económica no será suficiente para alcanzar la necesaria consolidación fiscal.

La deuda contraída por las autoridades regionales en la primera mitad de 1993 continúa creciendo rápidamente, lo que sugiere que el progreso hacia el equilibrio fiscal a nivel regional no es tan rápido como se había planeado. El reciente acuerdo para dar a las autoridades regionales una participación del 15 por ciento en la recaudación del IRPF en lugar de transferencias equivalentes del Gobierno Central, podría mejorar el sistema de recaudación y contribuir a la consolidación fiscal en 1994. Sin embargo, existe una clara necesidad de vigilancia en este campo. Las transferencias y los créditos del Gobierno a las empresas públicas continúan siendo sustanciales. La misión considera acertadas las medidas tomadas recientemente para mejorar la eficacia y competitividad de las empresas públicas y anima al Gobierno a acelerar las reformas necesarias para reducir la dependencia de estas empresas respecto a las transferencias del Estado.

La misión pediría a las autoridades que redoblaran sus esfuerzos para la pronta obtención de un acuerdo equilibrado y satisfactorio en la Ronda Uruguay del GATT. Las consecuencias positivas que para España y para el resto del mundo se derivarían proporcionarían un apoyo importante para la recuperación económica. Asimismo también existen beneficios asociados a la creación de flujos comerciales de la Comunidad Europea con los países vecinos del Magreb, o con los países del Este de Europa, y, por tanto, deben explorarse las posibilidades de expandir la relación comercial con estos países. La misión solicita del Gobierno una actitud positiva para apoyar el acceso de las exportaciones de estos países a la Comunidad Europea, incluyendo mercancía como el acero o los productos agrícolas.

